



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).



CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la [misma licencia](#) del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

EL DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN EN LO QUE CONCIERNE A LAS OPERACIONES DE NATURALEZA MILITAR EN COLOMBIA.

The right to request information regarding military operations in Colombia.

*Julián Reynaldo Marín Salgado*¹
Universidad Católica de Colombia

Resumen

El presente artículo versa sobre la insuficiencia del acceso a la verdad por parte de las víctimas de operaciones de naturaleza militar a información que se encuentra bajo reserva en el marco del pos-acuerdo. De esta forma, se lleva a cabo un análisis reflexivo y crítico sobre el derecho de petición en un escenario de pos-acuerdo el cual es fundamental para la Administración Pública debido a que es un tema de interés para particulares, servidores y funcionarios públicos. Lo anterior, debido a que se ha evidenciado la vulneración del derecho de los ciudadanos en recibir respuestas negativas a las peticiones que realizan, lo cual puede incidir en faltas disciplinarias porque incurren en el desconocimiento del derecho de acceso a la información.

Palabras clave: derecho de petición de información, operaciones militares, derecho al debido proceso, documentos de reserva y víctimas del conflicto armado.

Abstract

This article deals with the insufficiency of access to the truth by the victims of operations of a military nature to information that is under reservation in the framework of the post-agreement. In this way, a reflective and critical analysis is carried out on the right to petition in a post-conflict scenario, which is fundamental for the Public Administration because it is a subject of interest to individuals, public servants and officials. The foregoing, due to the fact that the violation of the right of citizens to receive negative responses to the requests they make has been evidenced, which can lead to disciplinary offenses because they are ignorant of the right of access to information.

¹ Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el Título de Abogado en la Universidad Católica de Colombia por del Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo Institucional: jmarin07@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por la doctora Johana Barreto docente de la Universidad Católica de Colombia. Abogada de la Universidad La Gran Colombia, Magister en Derecho de la Universidad La Gran Colombia.

Keywords: right to request information, military operations, right to due process, reserve documents and victims of the armed conflict.

1. Introducción

El escenario de pos-acuerdo en Colombia ha sido uno de los eventos coyunturales más importantes a nivel nacional. Indudablemente, estos cambios se dieron en diversos ámbitos, pero en el presente artículo nos enfocaremos netamente en los aspectos jurídicos y que posibiliten un reconocimiento de las víctimas y de los diversos victimarios por parte del Estado, como también de los grupos armados ilegales.

En este orden de ideas, Calderón (2016) sostiene que uno de los retos latentes en un contexto de pos-acuerdo es la inversión económica y social, puesto que es necesario el análisis del sistema conflictual y la superación de la violencia directa, estructural y cultural para poder trabajar en la reconstrucción, reconciliación y resolución de los conflictos. Así, el Acuerdo Final de la Paz tuvo como impacto en el ámbito jurídico la atención en los mecanismos para hacer efectivo el derecho a las víctimas a la reparación integral.

Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (2009) la insuficiencia del acceso a la verdad por parte de las víctimas y el desconocimiento sobre los mecanismos son aspectos relevantes para abordar, debido a que, aunque existe el proceso para acceder a la información se presentan casos en los que las víctimas de operaciones de naturaleza militar no logran acceder a la verdad, vulnerando de forma directa el derecho de petición de acceso a la información. Por consiguiente, se considera oportuno indagar sobre la relevancia del derecho de petición en la interacción entre ciudadanos y la administración en los casos en donde la víctima requiera conocer información sobre procedimientos en una operación militar que incidieron en su vida.

El acceso a la información que tiene carácter reservado es posible a partir del seguimiento por parte del individuo de un proceso riguroso, en el cual se encuentra presente el recurso de insistencia y de petición que verse sobre los hechos acaecidos, manifestar y demostrar su condición de víctima (Defensoría del Pueblo, 2021). La finalidad de este proceso para Franco (2011) consiste en que la persona involucrada e interesada se informe sobre las actividades operacionales ejecutadas por parte de agentes del Estado, pudiendo de esta forma esclarecer los hechos y salvaguardar el derecho a conocer la verdad sobre los hechos acontecidos.

Aunado a lo anterior, Molano (2014) sostiene que independiente de la condición de víctima cualquier ciudadano de Colombia tiene el derecho a recibir información por parte de las entidades públicas acerca de sucesos de interés particular, colectivo y general. Además, dicho proceso tiene un plazo indicado por la ley, so pena de responsabilidad por parte de los órganos públicos en los casos en que no se ejecute el proceso. No obstante, el principal obstáculo que se encuentra la víctima en la solicitud de información reservada consiste en que tiene como objetivo preservar la seguridad de la sociedad y del Estado.

Lo anterior, representa un problema debido a que los derechos fundamentales y garantías procesales de la víctima deben ser protegidos por el Estado, ya que son esenciales dentro de una eventual acción. Por consiguiente, se trae a colación la Sentencia T-301/04 emitida por la Corte Constitucional (2004) con el Magistrado Ponente Eduardo Montealegre, en la que se enfoca la atención en el criterio jurídico que posibilita o restringe el acceso a la información en un juicio de carácter penal, particularmente, porque el derecho a la información entra en conflicto con derechos constitucionales; como lo es el debido proceso. En dichos casos, el Estado debe propender por un equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima, respeto por los procedimientos judiciales y el derecho de la información.

Para Madrid (1998) el derecho de petición es esencial para la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Así, en la ley 1437 emitida por el Congreso de la República (2011) se determinan los lineamientos constitucionales sobre el derecho de petición y que posibilita que el interesado pueda acudir a la administración para obtención de una solución a su problemática.

De esta forma, en el artículo 23 de la Constitución Política (1991) se menciona que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas y garantizar los derechos fundamentales”. No obstante, como bien lo menciona Becerra, Agudelo y Bautista (2017) se está presentando una interpretación de carácter exegético que ha incidido en la forma en que se da respuesta o se sustenta la ausencia de respuesta al derecho de petición en el acceso a la información; razón por la cual, en los casos en los que se presenta un silencio administrativo negativo, muchos jueces consideran que no se vulnera el derecho de petición.

Por su parte, la Secretaría de Transparencia (2015) sostiene que el derecho de acceso a la información posibilita que el ciudadano interesado y, en este caso, la víctima pueda disponer de información oportuna y clara para su debido proceso. De esta forma, uno de sus principales retos consiste en que: se presenta una cultura del secreto en los servidores públicos, siendo recurrentes los obstáculos para entregar información; se debe dar claridad y se debe ser explícito en los procedimientos y herramientas relacionadas con el derecho; y, una coordinación interinstitucional para mitigar la posible ausencia de coordinación que se pueda presentar.

Además, Gamboa (2014) sostiene que la resolución del derecho de petición, como derecho constitucional y fundamental del ser humano, tiene un carácter de Acto Administrativo, puesto que crea una situación jurídica. Motivo por el cual, es direccionado a entidades públicas y privadas y tiene un carácter fundamental porque propende por la protección de los derechos del que realiza la solicitud, dando cumplimiento a los objetivos esenciales del Estado. En este sentido, es posible evidenciar el deber del funcionario público en la emisión de una respuesta congruente sobre el derecho de petición, so pena de incurrir en una falta disciplinaria.

No obstante, las instituciones del Estado son susceptibles de infringir el ordenamiento jurídico y, en estos casos, se vislumbra una vulneración de los derechos que son pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Así, es menester traer a colación la Sentencia T-426/92 emitida por la Corte Constitucional (1992) con el Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes en que se manifiesta que el ejercicio efectivo del derecho de petición integra el derecho a obtener una pronta respuesta. Por lo que, “si se presentan dilaciones indebidas en la tramitación y en la respuesta se habla de una violación del derecho (Corte Constitucional, 1992)”.

Para la Rama Judicial (2019) la información reservada radica en información personal que tiene relación con derechos fundamentales del titular (integrando su dignidad, intimidad y libertad) y que su acceso está limitado a un grupo exclusivo y no puede ser obtenida por una autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones; motivo por el cual, un ejemplo de estos documentos es la información clasificada que está vinculada con la defensa y seguridad nacional.

Indudablemente, el derecho de petición en un escenario de pos-acuerdo es fundamental para la Administración Pública debido a que es un tema de interés para particulares, servidores y funcionarios públicos. Además, porque se ha evidenciado la vulneración del derecho de los

ciudadanos en recibir respuestas negativas a las peticiones que realizan, lo cual, puede incidir en faltas disciplinarias porque incurren en el desconocimiento del derecho de acceso a la información y del debido proceso, entre otras cosas. Entonces, en los casos en los que se viola el derecho a un ciudadano de acceso a documentos reservados por una causa motivada, surge la obligación a la administración de brindar adecuada, efectiva y oportuna respuesta o resolución a la información solicitada por medio del derecho de petición (Gómez, González y Torres, 2018).

De lo expuesto anteriormente, existe claridad en que las organizaciones castrenses que están adscritas al Ministerio de Defensa tienen el deber de cumplir con lo dictaminado por la norma, motivo por el cual, ante la dilación o negación de la petición de acceso a la información, en su condición de víctima y en el ámbito penal, desprende una serie de problemas jurídicos. Indudablemente, la presente disertación no pretende sostener que la administración no vulnera el derecho de petición, sino que la pregunta problema consiste en ¿cuáles son los alcances del derecho de petición frente a la negación por parte de la administración a las víctimas de acceso a información amparada en la reserva legal?

De esta forma, la presente investigación pretende analizar los recursos a los que puede acceder la víctima para solicitar acceso a información de carácter reservado, analizar la jurisprudencia de la figura jurídica de reserva legal y su alcance; y, por último, contextualizar los recursos legales de insistencia frente a la herramienta jurídica de la reserva legal. Para ello, se implementa una metodología inductiva y se integra una revisión bibliográfica de libros y jurisprudencia, con la finalidad de poder sostener la hipótesis que versa sobre que el acceso de la información de carácter de reserva y derecho de petición es vulnerado en las operaciones de naturaleza militar en Colombia.

2. Derecho de petición desde una perspectiva constitucionalista a partir de los postulados de la Constitución colombiana de 1991

Los aportes de Locke (1983) y Montesquieu citado por citar Álvarez (1999) fueron significativos para la separación de poderes, el principio de legalidad y de libertad. Los objetivos principales de la Revolución Francesa descansaban en nociones de cambio de la forma de gobierno y con el transcurso del tiempo posibilitó el surgimiento de sistemas democráticos, como es el

Estado Social de Derecho, el cual propende por mejores garantías para el ciudadano, propendiendo el bienestar y la garantía a la vida digna de los miembros de su territorio.

Por consiguiente, en Colombia se consagra una figura legal en el artículo 23 de la Constitución Política (1991) el cual brinda la posibilidad de conocer actividades y conocer los fundamentos con los cuales se ejecutan determinados procesos. Sin embargo, los peticionantes se encuentran con obstáculos por parte de la administración en los casos en los que se trata de información de reserva, de forma que, existe un proceso determinado que puede ejecutar el individuo que desea acceder a la información, pero es probable que su solicitud sea negada; afectando de forma directa a la víctima porque les vulnera sus derechos y los deja desprovistos de herramientas que les permitan conocer el motivo por el cual se ejecutan actividades en su contra.

Ahora bien, para que se garantice el acceso a la información se presentan postulados en la Constitución Política (1991) en las cuales se sustenta la potestad que tiene el ciudadano y los legisladores para dar cumplimiento a lo solicitado. Para comprender lo anterior, Rojas (2016) sostiene que los beneficios del derecho de acceso a la información radican en que denota el funcionamiento del Estado, viabiliza la toma de decisiones y ejercicio satisfactorio de los derechos fundamentales, fortalece la ética de los funcionarios de garantizar la democracia y genera un Estado más responsable.

Por lo tanto, Agudelo (2019) destaca que la garantía de acceso a la información es una obligación de las tres ramas del poder público, órganos y organismos autónomos, personas naturales y jurídicas que tienen una función pública, que prestan un servicio o gestionan recursos públicos. La estructura de la Ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014) estipula la publicidad del contenido de la información, excepciones de acceso, garantías al ejercicio del derecho de acceso a la información y vigencia y medidas de promoción. Los aspectos para destacar son:

Tabla 1. Estructura de la Ley 1712 de 2014.

Estructura	Contenido
Disposiciones generales	Determina el objeto, el ámbito de aplicación de la ley y los sujetos obligados. Define los principios de transparencia y acceso

	a la información pública y conceptos relacionados con el ejercicio del derecho.
La publicidad y del contenido de la información	Integra las características de la publicación de la información, el contenido que se debe publicar, estructura, servicios y procedimientos. Establece los mecanismos y herramientas adoptados por los individuos obligados en el cumplimiento del derecho ciudadanos de acceso a la información.
Excepciones acceso a la información	Remite a la información pública clasificada o de reserva que puede ser denegada al interesado de manera motivada. Por lo que, establece las circunstancias específicas constitucionales y de protección a la integridad o seguridad de los ciudadanos o, sujetos obligados. Ante esto, los sujetos obligados tienen el deber de clasificar y notificar de forma oportuna la denominación, motivación e individualización de los actos, documentos e información reservada.
Garantías al ejercicio del derecho de acceso a la información	Versa sobre las obligaciones que se desprenden del derecho de todo individuo a solicitar y recibir información por parte del sujeto obligado, en determinada forma y condiciones establecidas por esta ley. Se determinan garantías y mecanismos con los que cuenta el individuo para el ejercicio efectivo de su derecho. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación son las encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones.
Vigencia y medidas de promoción	Remite a las medidas de promoción y capacitación de los sujetos obligados y a los ciudadanos en la asistencia e información para acceder a documentos, como también la vigencia de la ley a nivel nacional y territorial.

Fuente: Información obtenida de Agudelo (2019).

En este orden de ideas, la Ley 1417 emitida por el Congreso de Colombia (2004) informa que el derecho de acceso a la información clasificada puede ser denegada, motivo por el cual, su negativa esta motivada. La negación debe estar justificada y fundamentada, puesto que, debe cumplir con unos requisitos y ante la negativa el ciudadano puede implementar un recurso de

insistencia; siempre y cuando el interesado considera que estos motivos no son válidos y que dicha negación puede vulnerar sus derechos o, en el caso de las operaciones militares, afectar de forma negativa su condición de víctima.

Por consiguiente, Ceballos (2002) sostiene que el derecho de petición para acceder a información clasificada puede afectar de forma directa a la víctima de una operación militar, puesto que, no permite que el sujeto conozca sobre decisiones que afectaron su integridad y limita el alcance de la responsabilidad de la administración sobre determinado suceso. En dichos casos, el individuo debe proceder a un recurso de insistencia de forma respetuosa para solicitar a las autoridades administrativas sobre la importancia del acceso a la información clasificada y el requerimiento de una pronta resolución. Así,

El Derecho de Petición es el puente mediante el cual el administrado (o ciudadano) se acerca al administrador, en la relación societal. Es el camino mediante el cual cruza y entrelaza su entendimiento y relaciones con el Estado y es a través de él, mediante el cual ejerce y se reconoce como persona o como ciudadano; como miembro activo y participante de una sociedad organizada, construida con reglas de juego precisas y de la cual puede demandar y exigir la observancia de esas normas de convivencia. El Derecho de Petición se presenta como una modalidad de servicio al público, es decir a favor de los administrados y de los particulares (Bulla, 2010).

En otras palabras, el ejercicio de este derecho radica en que la administración se encuentra en la obligación de emitir una respuesta cumpliendo los términos que dicta la ley. Sin embargo, es el legislador el que se encarga de reglamentar el ejercicio de este derecho fundamental ante las entidades públicas, u organizaciones privadas, con la finalidad de asegurar su protección y el reconocimiento efectivo del derecho (Constitución Política de Colombia, 1991). Las principales características del derecho de petición son:

Tabla 2. *Características del derecho de petición y clasificación de los derechos de petición.*

Derecho de petición	Tipos de derechos de petición
Derecho fundamental inherente a todo ser humano.	La clasificación de los derechos de petición según Franco (2011) se puede realizar por las razones, si se presenta de

Se puede ejercer de forma verbal o escrita.	forma verbal o escrita, por los sus fines y por el respeto con el que se dirigen a la autoridad. Esto son:
Se efectúa ante entidades públicas o privadas.	- Quejas: dar conocimiento de conductas irregulares de servidores públicos, de particulares que tienen funciones públicas o que ha adjudicado la prestación de un servicio público. Siendo una petición de carácter individual que tiene como resultado actuaciones disciplinarias.
Aproxima al administrado y el Estado.	- Reclamos: informan a las autoridades noticias sobre la suspensión injustificada o la prestación de un servicio público. Motivo por el cual, es una solicitud que busca exigir el reconocimiento de un derecho.
El Estado tiene la obligación de decidir de forma pronta y oportuna las solicitudes de sus coasociados.	- Manifestaciones o sugerencias: tienen el objetivo de manifestar un deseo o información a las autoridades competentes sobre un asunto específico para que se tomen medidas de carácter individual o colectivo.
Garantiza el sistema de gobierno democrático, da a conocer la soberanía popular y la libertad de opinión.	- Peticiones de información y documentación: es un instrumento esencial del Estado de Derecho que garantiza el principio de transparencia de la actividad pública. El acceso a estos documentos públicos se da por medio de peticiones, pero integra diversas restricciones que buscan preservar el interés general en la solicitud de documentos.
La limitación radica en que se debe presentar las peticiones de forma comedida y respetuosa, so pena de eximir la autoridad de responder en los términos establecidos por la ley.	
Su interposición puede terminar en decisiones administrativas o de carácter judicial.	

Fuente. Elaboración propia a partir de información obtenida de Franco (2011)

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible evidenciar la posibilidad de negación de acceso a información de carácter reservado, por lo tanto, es menester traer a colación al artículo 22 de la Constitución Política (1991) en el que se estipula que los casos, en los que el ciudadano requiere

de acceso a la información sobre las acciones de las autoridades, este proceso se da en un plazo de 10 días hábiles. Por consiguiente, si en el transcurso de dichos días hábiles no se da una respuesta, la organización asumirá los efectos legales y se determinará por el denominado “silencio administrativo” que el documento será entregado en los tres días siguientes.

Respecto al silencio administrativo según Pérez (2014) puede ser entendido desde lo positivo el cual en el artículo 23 de la Constitución Política (1991) y al artículo 84 de la ley 1437 emitida por el Congreso de la República (2011) que remite a la ausencia de respuesta en determinado tiempo y el silencio negativo regulado por la ley 1437 emitida por el Congreso de la República (2011) y que reza sobre el transcurso de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se presentara una decisión que la resuelva. En consecuencia, en el momento en que la administración pública no se pronuncia ante una petición entonces se entiende que lo peticionado ha sido concedido, por lo que, la figura jurídica protege a los particulares frente a la ausencia de diligencia de la administración pública, haciendo que el silencio se convierta en un acto positivo.

Ante esto, surge la Ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014), la cual versa sobre la información pública clasificada que tiene una restricción de acceso, puesto que se considera que es información que puede afectar el derecho de la intimidad, la vida y secretos comerciales, industriales y profesionales. Igualmente, dentro de la norma se menciona que las excepciones tienen una duración limitada y no es implementada en los momentos en que la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de los datos personales/privados o, en los casos en los que la información es dada como parte de aquella información que debe estar bajo régimen de publicidad aplicable.

Aunado a lo anterior, se determina la información pública reservada que tiene un acceso denegado por la prohibición a partir de una norma legal o constitucional. Entre estos se encuentra la defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, prevención, investigación o persecución de los delitos, debido proceso e igualdad de las partes en los procesos judiciales, administración efectiva de la justicia, derechos de infancia y adolescencia, estabilidad financiera del país y salud pública (Congreso de la República, 2014).

En conclusión, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho el acceso a la información es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y, en los casos en los que se traten de documentos de reserva las entidades gubernamentales deben seguir unos criterios formales; y, en los casos en que exista una negación al acceso esta debe estar motivada y el individuo, en este caso las víctimas de una operación militar pueden implementar una serie de recursos administrativos y judiciales para poder tener garantía de sus derechos.

3. Recursos administrativos y judiciales en el proceso de derecho de acceso a la información de documentos de reserva.

La interposición del recurso, para Morón (1998) consiste en presentar peticiones de forma respetuosa a las autoridades y a diferentes actos administrativos por motivos de interés general o particular con la finalidad de obtener una pronta resolución. Por lo tanto, para el autor resulta relevante que el funcionario público tenga un comportamiento ético y propender por el esclarecimiento de los hechos o motivos por los cuales se niega el acceso a la información; como también, en brindar información clara y oportuna sobre el proceso que debe seguir el interesado. Esto, teniendo como objetivo general brindar la posibilidad a la administración y el administrado de brindar soluciones democráticas y eficientes al individuo antes de acudir a una sede principal.

En este orden de ideas, los recursos ordinarios son un instrumento que otorga el ordenamiento jurídico, para poder controvertir las decisiones administrativas que buscan crear modificar o, extinguir una situación jurídica de carácter particular. Los efectos de esta decisión, si bien propenden por la protección de la seguridad nacional, pública y relaciones internacionales, no obstante, se sostiene que uno de los motivos por los que puede ser negada es por el debido proceso y la igualdad de partes en los procesos judiciales (Ramírez, 2016).

En consecuencia, ante la vulneración de derechos es posible que la víctima o sus familiares acudan al mecanismo de defensa del derecho de petición, estipulado en la Constitución Política de Colombia. Esto, para Pérez (2004) puede provenir de una vulneración de derechos o conocer las causas en las que se desarrolló determinada operación en contra del ciudadano. Sin embargo, se han presentado varias situaciones en las que se presentan respuestas como la siguiente:

De manera atenta me dirijo a usted a fin de dar respuesta a su derecho de petición instaurado ante estas dependencias, a lo cual me permito comunicarle que dada su

calidad de particular, la información solicitada implica verificación de archivos del área de inteligencia, por lo cual no es procedente su solicitud debido a que estas bases de datos están protegidas por la ley mediante la figura judicial de la RESERVA.

Lo anterior según lo estipulado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 74; ley 1288 de 2009, artículos 20, 21 y 22; Código Contencioso Administrativo artículos 19 y 20; decreto ley 643 de 2004, artículo 45; Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 5; las anteriores leyes señalan que la información de inteligencia y contrainteligencia es de carácter RESERVADO y por lo mismo no puede ser difundida a particulares. (Pérez, 2004, pág. 31)

Ante dicha respuesta, Ramírez (2016) argumenta que algunas víctimas, en el desconocimiento de su derecho, se resignan y no interponen ningún tipo de mecanismo judicial. Por otro lado, existen casos en los que el individuo interpone un recurso de petición para acceder a la información, siguiendo el proceso estipulado por la Ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014) y no logra acceder a la información solicitada. De esta forma, Rodríguez (2019) sostiene que la negación motivada presentada anteriormente no es un criterio suficiente para que el Estado no brinde acceso a la información, sino que esta debe ser motivada por la administración:

El organismo de inteligencia en el cual se ampara la reserva para no dar acceso a información que tiene el carácter de reserva, se debe hacer por escrito y debe tener como intermediario a su director, el que se encarga de determinar el motivo, la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión y la fundamentará en esta disposición legal. En cualquier caso, frente a tales decisiones se procederán recursos y acciones constitucionales del caso. Congreso de la República, 2013, artículo 33.

Por consiguiente, se evidencia que se ha determinado un protocolo que el funcionario público debe seguir, no solamente dando una respuesta generalizada sobre la motivación de negación, sino que debe dar a conocer la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión. Además, con la aparición de la Ley de Transparencia en la ley 1272 emitida por el Congreso de la República (2014) determina la obligación de motivar la negación y de cualquier tipo de acto administrativo

que niegue el acceso a determinada información. Por lo que, Romero (2017) afirma que “si la ley obliga a motivar o la naturaleza del acto impone su motivación, la no expresión de sus motivos constituye un defecto de forma que lo hace anulable por expedición en forma irregular (pág. 45)”.

La negación de acceso a información solicitada en forma legal por medio de un derecho de petición debe integrar un análisis de los siguientes preceptos, los cuales son expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-466 emitida en el 2010 por los Magistrado Ponente Jorge Palacio, estos son:

1. La existencia de la reserva legal: de la misma forma que las personas tienen derecho a la reserva bajo el precepto de “información sensible”, el Estado en algunos casos y con carácter restrictivo, tienen derecho al secreto de Estado.
2. La necesidad de que las restricciones se encuentren sujetas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, guardando relación con la protección de los derechos fundamentales, como es el caso de la intimidad o de valores constitucionalmente protegidos, entre ellos, la seguridad y la defensa nacional.
3. El carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual los documentos pasan al dominio público. En este punto, los legisladores han sido claros de un lapso de 30 años para que los documentos estén sometidos a la reserva.

Por consiguiente, partiendo de lo mencionado por Secretaría de Transparencia (2015) sin el cumplimiento de dichos requisitos la entidad administrativa no puede proceder a la negación del derecho de petición en interés particular y, por ende, es improcedente el acceso a un documento bajo el amparo de la reserva legal. Los documentos reservados mencionados en el artículo 24 de la ley 1437 emitida por el Congreso de la República (2011), estos son:

- Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
- Los relacionados con la defensa y seguridad nacional.
- Los amparados por el secreto profesional.
- Los que integren derechos de privacidad, intimidad, historia laboral, expedientes pensionales y registros personales que se encuentren en las entidades públicas o

privadas, así como la historia clínica. Para el acceso a esta información se debe hacer una solicitud por parte del interesado y sus apoderados.

- Los relativos a las condiciones financieras y de tesorería, los cuales están en reserva en un término de 6 meses a partir de la realización de la respectiva operación.

Ante esto, es menester traer a colación la Corte Constitucional en la Sentencia de Tutela 881 del 2004 en la que se sostiene que el carácter reservado de un documento no impide que las autoridades soliciten en ejercicio a sus funciones la información, asumiendo la obligación de mantener la reserva de los documentos. Es decir, existe la posibilidad de acceder a la información bajo determinadas condiciones, firmando un acto administrativo en donde se da a conocer la responsabilidad que tiene el individuo sobre determinada información; y, en los casos de fuga de dicha información iniciar acciones penales o disciplinarias según el daño.

En conclusión, las normativas legales sobre el acceso a la información de reserva estipula y determina las medidas para acceder a información con carácter de reserva, no obstante, ante la negativa de acceso a la información (debido a la naturaleza de la información) existen mecanismos jurídicos y figuras legales que brindan garantía a los ciudadanos afectados por una negativa que no se encuentre justificada. Es decir, que en el caso de las víctimas de operaciones militares estas tienen diversos mecanismos que pueden ser presentados ante la administración para acceder a información.

Los tipos de recursos que se pueden interponer en los actos administrativos partiendo de la Ley 1427 de 2011 emitida por el Congreso de la República son el de reposición que remite a la decisión que toma el organismo para que se aclare, modifique, adicione o revoque una decisión y, el segundo, el de apelación que se dirige ante el superior administrativo o funcional con el propósito de aclarar, modificar, adicionar o revocar una decisión. Por lo tanto, Caballero, Cruz y Todaro (2016), sostienen que no es apelable a una decisión que tomen los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. A continuación, se presenta un análisis de los tipos de recursos, con la finalidad de poder comprender su alcance y objetivos en la búsqueda de acceso a la información sobre operaciones militares.

3.1. Recurso de reposición

Para Botello y Cauca (2018) el recurso de reposición es una vía procesal por la cual se llega directamente al funcionario que ha tomado una decisión administrativa con el objetivo de que se aclaren dudas o revoque una decisión, a través de un escrito presentado en la diligencia de notificación personal; esto, debido a que la norma indica que se procede en los actos administrativos de carácter individual. En este sentido, es una herramienta que tiene el destinatario del acto administrativo para impugnar decisiones que pueden afectar derechos y, por consiguiente, se interpone a la entidad que ha proferido un acto para la claridad, modificación, adición o revocar. Se puede llevar a cabo de forma verbal cuando se presenta en los estrados, y escrita, en las situaciones que se requiera.

De esta forma, es posible comprender que una figura legal que se interpone ante el funcionario y en los casos en los que es debidamente notificada se evita que sea afectada por nulidades en lo que concierne al Ministerio de Defensa. En este punto, se debe destacar que el recurso de reposición no es devolutivo, ni suspensivo y su conocimiento, como bien lo menciona Fernández (2016) se atribuye al mismo tribunal que ha tomado una decisión. Por este motivo, se presenta contra actos interlocutorios y autos no definitivos.

Otro aspecto interesante para destacar del recurso de reposición consiste en que ha sido altamente criticado porque se considera que incide en la evolución del proceso judicial, conduciendo al proceso en retardos; especialmente, en la emisión de la decisión por parte de la autoridad. Ante esto, Fernández (2016) sostiene que independientemente de la forma en que puede llegar a afectar un proceso judicial es un mecanismo útil porque permite que se desarrolle el proceso de forma adecuada. El recurso de insistencia en documentos de reserva es una responsabilidad del Tribunal Administrativo de la jurisdicción en el lugar donde se encuentran los documentos, por lo que, son estas autoridades las que pueden decidir la negación o aceptación de la formulación.

Ahora bien, el recurso de reposición es un elemento para analizar debido a que existe una diferencia normativa entre la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015 respecto al requisito de procedibilidad, puesto que en la primera se determina que se debe poner el recurso de reposición antes del de insistencia; mientras que, en la segunda norma el recurso de insistencia se puede implementar con la respuesta de la Administración, partiendo únicamente de la negativa fundada en reserva legal.

Entonces, comprendiendo la ley 1712 de 2014 denominada como la “Ley de Transparencia” se identifica que en las situaciones en la que se niega el acceso a la información se procede a hacer uso del recurso de reposición contra la decisión del sujeto obligado y se parte de un término de 3 días hábiles luego de presentar el recurso. La problemática de este recurso radica en que las diferencias entre la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015 puede conllevar a decisiones contradictorias en detrimento de los intereses del peticionario.

Esto, partiendo en las siguientes diferencias: primero, requiere de una interposición del recurso de reposición para proceder con el de insistencia, mientras que en otra no hay una procedibilidad; segundo, en la Ley 1712 la insistencia parte en la negación de documentos de reserva, mientras que en la Ley 1755 solo se implementa sobre seguridad y defensa nacional; y, por último, el término de interposición en la primera norma es de diez días hábiles, mientras que en la segunda no se habla de ningún término.

3.2. Recurso de apelación

Es un medio de impugnación por el cual se busca que un tribunal superior enmiende, conforme al derecho, la resolución del inferior, puesto que dentro del orden jurisdiccional hay diversas instancias que están ordenadas de manera jerárquica; lo cual para Botello y Cauca (2018) significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por un superior, debido a que una vez se presenta la elección es posible que una de las partes implicadas no se encuentre de acuerdo.

Para ello, la parte interesada tiene el derecho de usar la apelación y debe recurrir a un órgano jurisdiccional superior para que se revise el auto judicial o la sentencia, en los casos en los que se considere se está afectando algún derecho y proceder a que se corrija la consecuencia.

La presentación de los recursos de reposición que se encuentra establecido en el artículo 76 del Código Administrativo de los Contencioso Administrativo (2011), por lo que indica que se debe interponer por escrito en la diligencia de notificación personal o, en los 10 días hábiles siguientes a ella o al vencimiento del término de publicación, dependiendo del caso. De esta forma, se caracteriza por ser un recurso facultativo que depende de la decisión de la parte, ya que es un recurso autónomo que no se encuentra supeditado a otro recurso.

Por consiguiente, es un recurso que es definido como un principio de la doble instancia que se encuentra consagrado en la legislación procesal para impugnar ciertos actos interlocutorios y las sentencias de primera instancia. Es un recurso que tiene por objeto dar a conocer a un juez superior sobre la resolución de uno inferior, con la finalidad de que se revise y se presenten las debidas correcciones de errores presentados durante el proceso (Botello y Cauca, 2018). Se asemeja al recurso de reposición en la medida en que permite apelar contra los actos administrativos de contenido individual.

El recurso de apelación puede ser rechazado cuando la formulación no cumple con los requisitos previstos en el numeral uno del artículo 78 del Código Administrativo de los Contencioso Administrativo (2011). Los principales motivos de rechazo estipulados por la ley son: interposición dentro del plazo legal por el interesado o apoderado debidamente constituido, ausencia de sustento concreto de los motivos de la inconformidad y no brindar información sobre el nombre dirección del recurrente. Por lo tanto, en los casos que este recurso es rechazado se procede al de la queja; el cual para Botello y Cauca (2018) se presenta como una alternativa para acudir ante el superior jerárquico.

Por su parte, en los casos en los que el recurso de reposición no pueda prosperar, se procede al recurso de apelación, puesto que la controversia es dirimida por el superior jerárquico de quien profirió la decisión inicial; todo esto, en un plazo de 10 día siguientes a la solicitud. En este sentido, es un recurso esencial para aproximarse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es menester mencionar que el recurso de apelación procede sin que se haya interpuesto el de reposición, debido a que puede ser implementado en los procedimientos de naturaleza administrativa como judiciales (Barreto, 2016).

3.3. Análisis desde la perspectiva moderna

Existen diversos teóricos que indican que el derecho a la controversia en las decisiones administrativas garantiza la notificación de los fallos, puesto que, los términos legales el accionado, al impugnar una revisión, puede aportar o solicitar pruebas para controvertir las que obran en su contra, y presentar los argumentos probatorios. Este proceso se puede ejecutar en la primera y segunda instancia, la posible restricción de los derechos probatorios puede ser para

Zapata y Valencia (2012) justificada más fácilmente por los exigüos términos para fallar y por la posibilidad de debatir las pruebas con posterioridad al fallo.

No obstante, este proceso requiere de una justificación rigurosa, especialmente en los momentos en donde se practican pruebas durante el trámite de revisión de los fallos de tutela, ya que allí no proceden los recursos. Es un trámite facultativo y la Corte Constitucional tiene un plazo de tres meses para fallar, pudiendo ser suspendido en los casos en los que la sala de revisión lo considere conveniente para la práctica de pruebas. Por lo tanto, Zapata y Valencia (2012) afirman que es un proceso que brinda tiempo adecuado para que las partes conozcan las decisiones sobre las pruebas y dar cumplimiento al derecho de contradicción probatoria.

Así, el objeto del procedimiento de revisión de fallos de decisiones administrativas es el de examinar la constitucionalidad latente en las decisiones adoptadas en primera instancia, propender por la unificación de la jurisprudencia y la fijación del alcance de las normas constitucionales, más que la adopción de medidas inmediatas urgentes de protección de los derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que la protección de los derechos fundamentales es más oportuna en la primera y segunda instancia.

Aunado a lo anterior, el debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra presente en cada una de las actuaciones judiciales y administrativas. Por lo tanto, en la búsqueda de acceso a la información que se encuentra bajo reserva legal el ciudadano pretende que se le garanticen los siguientes derechos fundamentales mencionados por Pretelt (2012), a saber:

1. Derecho de petición en donde la administración debe dar respuesta y brindar la información.
2. Derecho a la defensa, en donde la administración debe garantizar el debido proceso en la entrega de la información para proveer claridad a los hechos que buscan ser esclarecidos y con ello brindar un sustento probatorio al accionante para proceder con las acciones correspondientes contra entidades y agentes del Estado responsables.
3. Derecho a conocer la verdad, que radica en que el administrado otorgue el conocimiento sobre temas de interés y, especialmente, en el momento en que el accionante se reconoce o es reconocido como víctima.

De esta forma, Vergara (2018) argumenta que si bien existen condiciones estrictas sobre las excepciones se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La reserva puede versar sobre el contenido de un documento público, más no sobre su existencia.
- La reserva legal solamente se implementa sobre información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero nunca sobre todo el proceso público en la cual dicha información se inserta.
- La reserva no versa sobre información que por decisión constitucional debe ser pública.
- La reserva debe ser temporal y su plazo debe ser razonable y proporcional al bien jurídico constitucional que busca preservar.
- Durante el período amparado por la reserva la información debe estar protegida para su posterior publicidad.
- La reserva puede ser oponible para los ciudadanos, pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control orgánico, jurídico y político de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la información reservada.

Continuando con lo anterior, Vivas y otros (2016) argumentan que la información pública reservada también integra el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, en dichos casos no será oponible cuando se verse sobre la práctica de pruebas y que ello conlleve la remisión al expediente de información confidencial o reservada. Debido a que, se debe salvaguardar el debido proceso y el principio de comunidad de la prueba, en dichos casos la parte que accede a la información clasificada debe comprometerse a guardar confidencialidad de la información; como también, bajo el acceso de establecen las condiciones en las que se puede hacer uso de dicha información.

Entonces, es posible afirmar que todo ciudadano puede incorporar peticiones dirigidas a la administración en aras a encontrar respuestas a las preguntas que se suscitan. Lo cual, es un aspecto relevante para la problemática a tratar en el presente artículo, puesto que evidencia la importancia de las peticiones que han surgido en el marco del pos-acuerdo y que integra operaciones militares que, dentro del conflicto armado, pudieron afectar a civiles.

Ante esto, la Administración es una entidad que tiene por obligación respetar la Constitución Política de Colombia (1991) y lo dictaminado por la ley, la cual le confiere al administrado la facultad de hacer los trámites adecuados frente a las decisiones que considere puede vulnerar sus derechos fundamentales. Por lo que, el respeto de los fines y los principios consagrados en la norma deben ser el criterio que oriente la Administración en el momento de generar una respuesta a las peticiones. De esta forma, se encuentran derechos implícitos en el derecho a la contradicción son:

Tabla 3.

Derechos implícitos en el derecho a la contradicción.

Derecho a la publicidad de la prueba	Derecho a la participación en la actividad probatoria	Derecho a contraprobar y a presentar argumentos frente a la prueba
<p>Implica que se asegure la publicidad de la prueba, ya que solo es posible oponer pruebas presentadas en su contra y participar en la exposición de argumento.</p> <p>Se garantiza por medio de notificaciones de las decisiones sobre las pruebas, rechazo, decreto y fijación de la hora para la práctica de pruebas presenciales. De esta forma se hace implícito la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción (Zapata y Valencia, 2012).</p>	<p>Asegura los valores democráticos ante las decisiones administrativas que pueden afectar al individuo. Tiene lugar en el campo administrativo y posibilita la adecuación y validez de la actuación de la administración.</p> <p>Es un mecanismo que optimiza y hace eficaz la actuación de la administración, puesto que posibilita que exista una adecuación de estas a los hechos y las situaciones sobre la que recae (Patiño y Ruíz, 2012).</p>	<p>Es el derecho que tiene el ciudadano de presentar y controvertir pruebas a las que se alleguen en su contra. Es una posición jurídica con la finalidad de propender por la formación de la convicción sobre la verdad de los hechos que constituyen el presupuesto del derecho que se disputa (Ruiz, 2007).</p>

Nota. Elaboración propia a partir de información obtenida de Zapata y Valencia (2012), Patiño y Ruiz (2012) y Ruiz (2007).

3.4. Recurso de insistencia

En los casos en los que un individuo desee acceder a la información pública por medio de un derecho de petición debe tener presente que es posible que se encuentre con una respuesta negativa por parte de la administración; esto, bajo el motivo de que la información solicitada es reservada. Ante esta situación, y para problematizar el tema a tratar en el presente artículo, se debe traer a colación la excepción a la regla del derecho constitucional al acceso de información pública. La cual, se encuentra establecida en el Código Administrativo de los Contencioso Administrativo (2011) y que versa sobre los mecanismos por los cuales las personas pueden insistir para que se evalúe el fundamento de la respuesta negativa.

En este orden de ideas, la expedición de la Ley 57 de 1985 emitida por el Congreso de la República ha conllevado a que los Tribunales Administrativos tomen decisiones sobre al recurso de insistencia de información pública. No obstante, son pocos los recursos de insistencia que se han resuelto a favor del peticionario, lo cual para del Río (2012) proviene de los siguientes aspectos:

- Falta de requisito de procedibilidad en el momento en que el individuo acude al juez administrativo, sin implementar el recurso de insistencia ante la entidad que negó el acceso a los documentos de reserva; como también, cuando el peticionario remite la documentación al juez administrativo sin esperar que la administración lo haga.
- La información del interesado alega como negada no se fundó en “documento de reserva” sino en otra causal, razón por la cual la respuesta no suple con la solicitud.
- Indebida representación cuando se insiste ante el juez administrativo es común que en este caso se presente momentos en los cuales la persona que hace el derecho de petición no es la misma que ejecuta el recurso de insistencia.
- El individuo implementa el recurso de insistencia ante una entidad que no tiene naturaleza pública.
- Ausencia de un requisito de procedibilidad los cuales se encuentran establecidos en la Ley 1712 de 2014.

No obstante, cuando el ciudadano o el interesado se aproxima al recurso de insistencia se encuentra con diferencias entre lo mencionado por la Corte Constitucional en la ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014) en donde se pone como requisito de procedibilidad interponer un recurso de reposición; mientras que, en la ley 1755 emitida por el Congreso de la

República (2015) se plantea que la insistencia procede con la respuesta de la administración. Es decir, en la segunda ley no se menciona más recursos que de la negativa fundada en reserva legal.

Por consiguiente, se presenta una problemática jurídica porque coexisten dos normas que pueden negar dicha información, basándose en los preceptos de seguridad nacional. Es decir, no existe una claridad acerca de si el peticionario, inequívocamente, debe acudir a interponer el recurso de reposición en el caso de la Ley 1712 712 emitida por el Congreso de la República (2014) o, debe impetrar un recurso de insistencia en su petición según lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 1755 emitida por el Congreso de la República (2015).

Entonces, para Rodríguez (2019) esto representa una problemática interpretativa para los jueces encargados de brindar o no información de carácter reservado, teniendo como consecuencia directa una ausencia de criterio hermenéutico frente a la procedencia de dicho recurso. Además, dentro de la sede judicial se presentan casos en los que muchos magistrados se inhiben de pronunciarse sobre la información que se está solicitando o, que los jueces administrativos tomen decisiones contradictorias en detrimento al interés de la ciudadanía. Lo cual, afecta de forma directa los derechos fundamentales ligados con el derecho de petición, acceso a la información pública, eficacia y aplicabilidad del recurso de insistencia.

Por lo anterior, resulta relevante indagar sobre la implementación del recurso de insistencia para poder conocer el criterio que adoptan los jueces en Colombia en el momento en que se debe dirimir controversias entre la administración y la ciudadanía; particularmente, porque trata de derechos que se encuentran expuestos a una constante tensión. Además, Ramírez (2016) destaca un punto relevante de la discusión y es que la doctrina en Colombia no ha propendido por un análisis de la figura de insistencia, el cual en algunas ocasiones ha sido sometido a crítica porque es un recurso limitado ya que está circunscrito a los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y a los organismos de control. Ante lo cual, la Fundación Libertad de Prensa (2010) sostiene que el derecho a la información debe integrar a la rama legislativa, judicial y órganos autónomos.

Para Agudelo (2019) la posibilidad de insistir ante la administración sobre el conocimiento de información que un ciudadano requiere se encuentra fundamentada en derechos universales establecida en tratados internacionales; como es la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, entre otros. A nivel nacional la Constitución Política de Colombia (1991) los artículos 20 y 40 establecen el derecho de los ciudadanos a acceder a documentos públicos.

Ciertamente, la ley 57 emitida por el Congreso de la República (1985) regula la manera en que la administración garantizar a los interesados el acceso de la información pública y el derecho a insistir en caso de una negativa por parte de la administración. Empero, desde su expedición hasta la actualidad han sido diversas las decisiones que han proferido los Tribunales Administrativos frente al recurso de insistencia de documentos o información pública. En consecuencia, son pocas las veces que este recurso ha sido resuelto a favor del peticionario, por lo general, la motivación de esta negación radica en que los ciudadanos no hacen el uso adecuado de este, falta de requisito de procedibilidad, indebida representación, la elevación de la insistencia a entidades que no tienen naturaleza pública o falta de requisito de procedibilidad; como se menciona anteriormente.

Ahora bien, en los procesos que se presentan actualmente en el marco del posconflicto esta situación puede conllevar a una re-victimización del solicitante y una vulneración al derecho fundamental de petición. Lo anterior, en situaciones en donde se han ejecutado operaciones militares por parte de los agentes del Estado y que implican no solamente a la víctima, sino también a sus allegados. Indudablemente, es importante dicha información para la individualización de los responsables y para la construcción de un acervo probatorio, constituyendo el inicio de los procesos de responsabilidad penal o administrativa correspondiente.

3.5.Recurso de insistencia en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015

La ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014) consagra el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía dando cumplimiento a un derecho constitucional y fundamental. En la norma se dictamina que toda información bajo control o custodia de un sujeto es pública, razón por la cual, no puede ser reservada y solamente se puede presentar excepciones en las causales determinadas por la norma, estas son: cuando se trate de información clasificada y reservada. De esta forma, en el artículo 19 de la ley 1712 emitida por el Congreso de la República (2014) se determina que la información de carácter reservado es aquella que de conocerse puede conllevar a daños de interés público y, por ende, es rechazado de manera motivada porque afecta:

- Defensa y seguridad nacional.

- Seguridad pública.
- Relaciones internacionales.
- La prevención, investigación y persecución de delitos y faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule un pliego de cargos.
- El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales.
- La administración efectiva de la justicia.
- Derechos de infancia y la adolescencia.
- La estabilidad macroeconómica y financiera del país.
- Salud pública.

Por consiguiente, Atahualpa (2013) sostiene que en los casos en los que la información es rechazada por ser reservada se debe presentar la motivación por escrito y debe ser respondida por la autoridad correspondiente. En dicho caso, el peticionario tiene el derecho de interponer un recurso de reposición en los próximos tres días siguientes a la notificación y debe ser dirigida al mismo funcionario. Ante el rechazo de este recurso o confirmación de negar acceso a la información por las causales el patenté puede implementar la figura de insistencia, pero direccionada al superior jerárquico.

Luego, con la ley 1755 emitida por el Congreso de la República (2015) se presentan especificaciones sobre el recurso de insistencia, particularmente, en el artículo 24 en el que se hace referencia a la información y documentos reservados. Por lo tanto, presenta como documentos de reserva los relacionados con la defensa o seguridad nacional, instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, información que involucre derechos a la privacidad e intimidad de las personas, información sobre condiciones financieras de operaciones de crédito público que ejecute la nación, documentos protegidos por el secreto comercial e industrial, secretos profesionales y datos genéticos humanos.

Posteriormente, se presenta en la ley 1755 emitida por el Congreso de la República (2015) un párrafo en el que se menciona que la solicitud de información de carácter reservado solo puede ser solicitada por el titular de la información, apoderados o personas autorizadas con facultad expresa para tener acceso a la información. Lo cual, indica que en la norma mencionada no procede ningún recurso en los casos en que la información es negada por motivos de reserva; sin embargo, en el artículo 26 se menciona que el interesado puede insistir en su petición de

información o de documentos ante la autoridad ante el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar que se encuentran para la toma de decisión de aceptación o negación (total o parcial) de la petición formulada (Rodríguez, 2019).

Por su parte, los criterios jurisprudenciales y los parámetros constitucionales sobre la información reservada han sido abordados en la sentencia C-1951 emitida por la Corte Constitucional (2014) y sostiene lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho al acceso de los documentos públicos debe ser entendido como una manifestación concreta del derecho a la información, que en muchas ocasiones se encuentra determinado por la efectiva garantía del derecho fundamental de petición, previsto como el mecanismo por antonomasia para acceder a la información de carácter público. De igual modo, la salvaguarda de la libertad de información y acceso a los documentos públicos no es solo un derecho de los medios de comunicación social y de quienes ejercen la actividad periodística, sino una libertad y un derecho fundamental de toda persona en un régimen democrático, en la medida en que “la libertad de información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole. Tanto la libertad de opinión como la de información, pueden ser ejercidas por cualquier persona y a través de cualquier medio de expresión.

Por consiguiente, es posible evidenciar que las personas que desean acceder a la información lo pueden hacer por medio de un derecho de petición, no obstante, existe una contradicción en la coexistencia de dos normas que pueden conducir a la negación de la información por las mismas razones. Tal es el caso de la posible confusión que se le puede presentar al peticionario en el momento de acudir a interponer al recurso de reposición con la ley 1712 de 2014 o, si debe insistir en su petición según lo preceptuado en el artículo 26 de la ley 1755 de 2015.

De esta forma, Vergara (2018) sostiene que las dos normativas tienen puntos críticos sobre el ejercicio de acceso a la información pública y enfoca su análisis en los mecanismos que tiene los ciudadanos del derecho de disposición para a impugnación de las decisiones negativas de

acceso a la información; particularmente, en los casos en los que la administración pública motiva la negación bajo la noción de ser información reservada. Ahora bien, el autor sostiene que en el artículo 23 del Código de Contencioso Administrativo (1984) se previa que las decisiones del derecho de petición de información se encuentran sujetas a recursos establecidos en la norma, que en otras palabras quiere decir que se podía ejecutar un recurso de reposición y apelación en los casos que se requería y agotando la vía gubernativa.

Por consiguiente, Barreto (2016) afirma que bajo la ley 56 emitida por el Congreso de la República (1985) se presentan cambios sustanciales sobre la obligación que tiene la administración de motivar una decisión negativa de acceso a la información y de la creación de un mecanismo extraordinario para la impugnación de esta clase de decisiones; dictaminando que es la jurisdicción contencioso-administrativa la que debe decidir sobre estos asuntos. Posteriormente, el recurso de insistencia es previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011) y se integra la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional (2011) y que es incluido en la ley 1755 de 2015.

Lo anterior, conlleva a que la decisión negativa al acceso de la información pública no sea susceptible de recursos de la vía gubernativa, sino del mecanismo extraordinario de insistencia. Esto para Gómez, González y Torres (2018) indican que luego de la toma de una decisión sobre información reservada es del juez o tribunal administrativo que corresponda. Nuevamente, y como se ha mencionado anteriormente se evidencia que existe una confusión del proceso debido a la coexistencia de dos normas, teniendo como principal consecuencia respuestas variables por partes de los jueces ante los recursos y ausencia de unidad de criterio frente a la procedencia de dicho recurso.

4. Derecho a la información

El acceso a la información en Colombia es un derecho fundamental, no obstante, para La Fundación para la Libertad de Prensa (2011) es un recurso de los que pocos conocen y ello puede incidir de forma negativa en el ejercicio de la democracia, debido a que integra la acción del Estado y de la sociedad. Una de las principales problemáticas con el derecho a la información radica cuando se solicita información reservada, la cual es preponderante en las entidades. Además, en diversos casos la forma en que reaccionan los funcionarios públicos ante la solicitud

de información para el autor este fenómeno es frecuente en la petición de información por parte de periodistas o, en el caso del presente artículo de ciudadanos que son considerados víctimas en el marco del conflicto armado de Colombia.

Aunado a lo anterior, Molano (2014) argumenta que dentro de la cultura colombiana existe una ausencia de publicaciones proactivas de información clave que incide de forma negativa en los derechos de la ciudadanía. En términos generales para el autor es común que el Estado no de cumplimiento a su obligación de conocer información sobre entidades públicas, los funcionarios públicos y, en el marco del posconflicto, de las acciones en las cuales se encuentran implicados actores de la fuerza pública; ciertamente, en diversas ocasiones se han ejecutado buenas prácticas que permiten que el ciudadano acceda a la información de forma fácil y oportuna.

Como se ha mencionado anteriormente, el acceso a la información se encuentra regulada por normas nacionales y jurisprudencia, por lo cual las prácticas de los funcionarios públicos en el acceso a la información pública se encuentran regulada. Sin embargo, para Pérez (2014) el proceso de solicitud se puede ver obstaculizado por la complejidad implícita en los procesos internos de entrega de información; esto, debido a que, en muchas ocasiones, este es el caso de las víctimas del conflicto armado, se considera que existen riesgos políticos o jurídicos.

Ante esto, existen medios de defensa ante la negativa de los derechos a documentos, tales como el recurso de reposición, de insistencia y acción de tutela; entre los cuales se destaca el derecho de petición como uno de los mecanismos esenciales a los que puede recurrir un ciudadano en el momento en que se sienta afectado por actividades de inteligencia y contrainteligencia. Esto, con la finalidad de poder conocer las bases sobre las cuales se ha ejercido una actividad o una acción. Por consiguiente, Ramírez (2016) argumenta que la administración debe, por norma constitucional, proveer respuesta a las inquietudes del interesado; todo esto bajo un proceso determinado por la norma y, en el caso de su negación, esta misma debe estar sustentada sobre supuestos específicos, distanciándose de una toma de decisiones personales.

Ahora bien, en el marco del posconflicto en Colombia se presenta un reto en lo que respecta a los derechos a las víctimas, puesto que el Estado debe propender por la protección del individuo y de las víctimas que han sido afectadas en sus derechos civiles y políticos. De esta forma, el Estado debe velar por el goce efectivo del derecho a la verdad, justicia y reparación de los individuos

afectados por el conflicto armado (Pérez, 2014). Respecto al derecho a la verdad, este se encuentra sustentado en el reconocimiento a las víctimas, la posibilidad de obtener una narrativa de las violaciones de derechos humanos a las que estuvieron expuestos y de conocer a profundidad los sucesos y la motivación bajo los cuales se ejecutaron ciertas acciones.

El cumplimiento de este derecho es un aspecto inherente a un marco de justicia transicional y es allí donde el Estado debe proveer y asegurar la información a la víctima, representantes y abogados, con la finalidad de materializar sus derechos; teniendo en cuenta las normas que estipulan la reserva legal y que regulan el manejo de la información confidencial (Rodríguez, 2019). En consecuencia, la Corte Constitucional (2014) sostiene que,

Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos

Por consiguiente, en el marco del posconflicto y con la finalidad de preservar la paz es menester que los derechos a las víctimas se cumplan y que se materialicen en la práctica, especialmente, porque el conflicto armado en Colombia integró diversos actores del Estado y grupos armados ilegales (Vivas, y otros, 2016).

5. Análisis jurisprudencial al momento de reconocer el derecho a la información de los documentos bajo reserva

En el presente apartado se procede a realizar un análisis jurisprudencial en el momento en el cual se reconoce el derecho a la información de los documentos bajo reserva. Por lo tanto, en un primer momento se presenta un caso y, posteriormente, se presenta un análisis sobre la toma de decisión. De esta forma,

Primer caso

Expediente: 25000-23-41-000-2017-00369-00

Solicitante: Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad - Dejusticia

En este caso en particular se tiene en cuenta la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, Subsección A del 10 de mayo de 2.017, magistrada ponente Claudia Elizabeth Lozzi Moreno:

Hechos

Mediante Petición presentada el 28 de noviembre de 2.016n Vivian Newman Pont, subdirectora y representante legal del Centro de Estudios de Derecho, justicia y Sociedad – de justicia le solicitó al Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, la entrega de los siguientes documentos:

- Circular n° 067.93
- Circular n° 124MDN-CGFM-CE-DIDIC-13.2
- Directiva permanente n° 0188/2009
- Directiva 137/2011
- Reglamento 3-30 de 2.005
- Manual de seguridad Militar 2009
- Manual de servicios de regimiento interno
- Acuerdo 052 de 2013 CSSMP
- Contrato 060 DGSM de 2014

“Una vez consultada dicha información al Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se encuentra con el reglamento general de inspecciones del Ejército EJ-3-7-1 segunda edición, aprobado mediante Resolución N° 02541 de 2016 con clasificación de carácter restringido, este manual busca establecer parámetros y unificar criterios que permitan la inspección en forma idónea, mediante la aplicación de técnicas de auditoria, la gestión de áreas, proceso y procedimientos que se desarrollan en los diferentes niveles del Ejército Nacional que hacen parte del sistema integrado de gestión.

Así mismo, el reglamento interno del cuartel general del Comando del Ejército EJC 3-30 de 2.005, aprobado mediante Resolución n° 827 de 18 de

septiembre de 2000 primera edición, con clasificaciones de carácter reservado, el cual tiene por objeto impartir normas de carácter permanente sobre el régimen interno tendientes a regular el funcionamiento del Cuartel General del Comando del Ejército. La observancia y el cumplimiento de las normas consignadas en el presente reglamento serán responsabilidad de cada servidor militar civil al servicio del Cuartel General del Comando del Ejército, así mismo cada oficio jefe dependencia garantizará el conocimiento, aplicación y control por parte de subalternos”. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca (10 de Mayo 2017) N° 2017-369, 2017)

El Tribunal declaró improcedente y bien denegado parcialmente dicho recurso de insistencia frente a la solicitud de información y documentos, “respecto del Manual de Seguridad Militar (EJC-2-4-1 de 2009) y el Reglamento de Régimen Interno del Cuartel General del Comando del Ejército (EJC-3-30 de 2005), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la sentencia: que se declarara mal negada la solicitud de información y documentos respecto del Reglamento General de Inspecciones del Ejercito Nacional (Reglamento EJC 3-7-1), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; se ordenó al jefe de Estado Mayor del CEDOC del Ejercito Nacional, para que el termino de 10 días siguientes a lo notificación de la providencia, entregue a la Representante Legal de la DEJUSTICIA o quien haga sus veces, copia del Reglamento General de Inspecciones del Ejercito Nacional (Reglamento EJC-3-7-1); y por último que se declare reservado el expediente de la referencia, y por secretaria devuélvase los anexos al Comando de Educación y Doctrina del Ejercito Nacional sin necesidad desglose”. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca (10 de Mayo 2017) N° 2017-369)

El Tribunal se basó en el criterio expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-274 de 2013, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa:

“En particular la Corte ha señalado que la finalidad de proteger la seguridad o defensa nacional es constitucionalmente legítima y por lo tanto para el logro de tales objetivos puede establecerse la reserva de cierta información. Sin embargo, en

cada caso es necesario “acreditar que tales derechos se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace necesario mantener la reserva”. Corte Constitucional, La Sala Plena (9 de mayo de 2013) Sentencia C-274/13 Magistrada Ponente María Victoria Calle.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible comprender que el argumento de la preservación de la seguridad nacional afecta de forma directa el derecho fundamental a la información de las personas que son dignas de conocer la verdad. Dicha decisión puede ser atribuida a una falla en el servicio a los miembros de la Fuerza Pública, lo cual conlleva a una re-victimización de las personas afectadas y vulnera su derecho a la verdad. Esto, entra en detrimento directo con la víctima porque la imposibilita de conocer los hechos y, por consiguiente, limita la verdad a los únicos que saben con certeza los hechos, derechos vulnerados y actores inmersos en dichas situaciones.

Por otro lado, como bien lo menciona Vásquez y Gil (2017) los Estados tienen un ministerio encargado de la seguridad nacional y es común que estos se muestren renuentes a proporcionar información, en tanto que puede representar una amenaza para el territorio que custodian y porque se pueden ver implicadas futuras operaciones militares. No obstante, en el marco del posconflicto y en aras a dar cumplimiento a derecho de las víctimas a la verdad es importante que la administración este en la obligación de proporcionar información y, con ello, obtener justicia.

Lo anterior, en la medida en que durante el conflicto armado se ejecutaron operaciones militares que tuvieron como consecuencia la violación sistemática de derechos humanos y fundamentales. Ciertamente, todo ello corresponde a un momento histórico en el cual estuvieron involucrados en el conflicto diversos actores, bajo diversos ideales y causas. Por consiguiente, la principal población víctima ha sido civil que se encontraban en medio del fuego cruzado en diferentes zonas del país. De esta forma, en un escenario de pos-acuerdo la víctima adquiere derecho a la verdad, justicia y reparación, por lo cual el mecanismo de derecho de petición le permite acceder a información sobre los sucesos que acaecieron.

5.1. Derecho de defensa y debidos procesos en cuanto a la información de los documentos bajo reserva

La sentencia C-371 emitida por la Corte Constitucional (2011) es reiterativa en la fundamentación del derecho a la defensa para la garantía de un debido proceso y en las diversas etapas de investigación. Esto, con la finalidad de evitar cualquier tipo de error en el momento de imputar un delito a una persona. Por eso, es un proceso en el cual el individuo puede ser escuchado, presentar sus razones y argumentos por medio de la prueba; con lo cual Gómez, González y Torres (2018) sostiene se evita que se pueda cometer una arbitrariedad por parte del poder sancionatorio del Estado.

Por consiguiente, en los casos en los que no se haga material el derecho a la defensa se presentaría una violación al derecho a la igualdad y al debido proceso, afectando los derechos e intereses sustanciales y procesales. Lo cual, significa en otras palabras que en los casos en los que se niegue el derecho a la defensa en la etapa investigativa al indiciado, se estaría hablando también de una violación al debido proceso (Romero, 2017).

En conclusión, el derecho a la defensa dentro del ámbito jurídico permite que se de garantía a los derechos fundamentales del Estado Social de Derecho, el cual tiene por objeto cambiar la noción de las personas como un elemento dentro del proceso, aceptar su calidad de persona con prerrogativas que aseguren un acceso a la justicia.

5.2. Tratamiento del acceso y la reserva de la información pública

El acceso a la información tiene un elemento importante dentro de la ejecución de una nación democrática, puesto que, con los avances tecnológicos y el uso de las Tecnologías de Comunicación es posible coadyuvar a la administración para que la información se entregue al solicitante de forma efectiva. Por lo tanto, como se indica en la Sentencia C-274 emitida por la Corte Constitucional (2013) el derecho de acceso a la información pública integra dos deberes correlativos a las autoridades estatales, a saber:

- a. Suministrar a quien lo solicite, información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada, sobre su actividad;
- b. Conservar y mantener la información sobre su actividad, ya que, de no hacerlo, se vulnera el derecho de las personas al acceso a la información pública y, en consecuencia, el derecho a que ejerzan un control sobre sus actuaciones.

De esta forma, en la sentencia C-274 emitida por la Corte Constitucional (2013) se estipulan las normas jurisprudenciales que determinan el alcance del derecho a acceder a la documentación e información pública y las condiciones constitucionales para que se pueda ejercer. Por su parte, las normativas jurisprudenciales que determinan el alcance del derecho fundamental son mencionadas en la sentencia C-491 emitida por la Corte Constitucional (2007), siendo la regla general el permitir acceso al ciudadano a todos los documentos públicos y dicha información debe ser clara, completa, oportuna, cierta y actualizada. Las principales consecuencias que implican dicha regla son:

- I. Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva.
- II. Toda limitación debe estar adecuadamente motivada.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional (2007) indica las condiciones estrictas en las cuales el legislador puede determinar excepciones a la regla, identificando como la más relevante que la reserva puede operar respecto al contenido del documento público, pero no sobre su existencia, es decir que se debe dar a conocer la existencia del documento reservado. También, indica que la reserva legal solo opera sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, nunca sobre todo el proceso público dentro de la cual dicha información se inserta.

Continuando con lo anterior, la sentencia C-274 emitida por la Corte Constitucional, La Sala Plena (9 de mayo de 2013) Magistrada ponente María Victoria Calle menciona que la reserva legal no puede no puede cobijar información que, por decisión constitucional deber ser pública, ser temporal y su plazo debe ser razonable y proporcional al bien jurídico constitucional que la misma busca proteger. Y, por último, “la reserva puede ser oponible a los ciudadanos, pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control orgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la información reservada Corte Constitucional, La Sala Plena (9 de mayo de 2013) Sentencia C-274/13 Magistrada ponente María Victoria Calle.

Los principios rectores que permiten garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información pública son, principalmente, es el de máxima divulgación. En este se ordena el diseño de un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la

información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones. En consecuencia, se presentan dos efectos mencionados en la sentencia C-274 emitida por la Corte Constitucional (2013) son:

- I. El derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información.
- II. Toda decisión negativa del acceso debe ser motivada; y (iii) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información. Lo anterior involucra el cumplimiento de las siguientes reglas: limitación de reserva a eventos en que su publicación o divulgación que compromete los bienes que se preservan, una carga probatoria para el Estado en los casos en los que se determinen limitaciones para acceder a la información y asegurar el derecho de acceso a la información en los casos en que exista conflictos entre las normas o ausencia de regulación.

De esta forma, es por medio de estas normativas latentes en la sentencia C-274 emitida por la Corte Constitucional (2013) que se promueve que el Estado cumpla efectivamente con sus deberes de determinar claridad en la ley sobre el acceso a la información pública y a que su interpretación resulte favorable al derecho de acceso. También, se hace énfasis en la actuación y en el momento en que otorgan los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, en aras a promover la transparencia en la gestión pública, funciones y servicios públicos. Por lo tanto, este tipo de respuesta ante la solicitud debe estar acompañada de acciones diligentes, profesionales y con lealtad institucional.

6. Reflexión sobre los documentos bajo reserva en el Ministerio de Defensa Nacional

Las entidades que se encuentran obligadas a dar cumplimiento del derecho a la información son las entidades públicas de las tres ramas del poder público en cada uno de sus niveles, los órganos estatales independientes y de control, las personas naturales jurídicas que ejecutan una función pública, los movimientos políticos y las entidades que administran instituciones parafiscales. En este sentido, el Ministerio Público es el que se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.

Retomando la problemática abordada en el presente artículo, es menester realizar una reflexión sobre el rol que tienen el Ministerio de Defensa en la proporción de la información reservada, en tanto que, la planeación de operaciones militares y la ejecución de las mismas tienen una repercusión en las personas; como también, estos ciudadanos tienen el derecho de acudir a instancias administrativas y judiciales para que se le brinde información clara de lo que aconteció.

Para Molano (2014) uno de los desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto consiste en establecer la responsabilidad por los daños antijurídicos que recaigan en particulares con ocasión de actos terroristas y, por ende, preguntarse sobre cuál sería el título de imputación aplicable. Para ello, Romero (2017) sostiene que es relevante llevar a cabo un análisis jurisprudencial de los diversos fallos que han sido proferidos por el Consejo de Estado, empero este órgano de cierre no tiene una línea jurisprudencial uniforme sobre la responsabilidad del Estado por actos terroristas. Es decir, tiende a ser variable, por lo que, existen situaciones fácticas similares en donde se aplica un título diferente al anterior o casos en donde el alto tribunal indica que no hay una responsabilidad del Estado, incluso cuando en otros casos similares si se había aceptado una responsabilidad.

El sistema legal de Colombia debe ser comprendido y analizado a partir del respeto por las garantías establecidas en la Constitución Política (1991), puesto que es en esta que se propende por los derechos de los ciudadanos y que busca materializar el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, es a partir de esta que se debe dar direccionamiento y efectivo cumplimiento de los fines y principios de forma armónica de cada uno de los procesos administrativos y del actuar de los órganos públicos. Es así como el derecho de petición se presenta como un mecanismo de participación ciudadana y que, por la revisión jurídica desarrollada en el presente trabajo, debe ser respetado para dar cumplimiento al debido proceso y garantizar el acceso de la ciudadanía a sus derechos fundamentales.

Además, se puede evidenciar un aspecto crítico en la implementación de este en los casos de víctimas en el marco del pos-acuerdo, particularmente, porque en la búsqueda de la construcción de la verdad, justicia y reparación se puede encontrar como obstáculo el acceso a información en los casos en los que se encuentran implícitas acciones de agentes del Estado. De esta forma, se considera oportuno presentar una tabla sobre dos aspectos relevantes, a saber:

Tabla 4.

Responsabilidad del Estado de Colombia por daños antijurídicos causados por actos terroristas.

El caso concreto del terrorismo	Efectividad en los regímenes y reparación administrativa
<p>La institución presenta constantes variaciones a partir de las posturas latentes en la jurisprudencia, por lo tanto, se presentan discusiones sobre la postura de garante que asume el Estado en la protección de los derechos de los individuos. Esto, teniendo en cuenta que en el artículo 2 de la Constitución Política (1991) se menciona el rol de protección a la sociedad.</p>	<p>Régimen subjetivo: falla del servicio</p> <p>Hace referencia al consenso que ejecuta el Alto Tribunal para postular la falla del servicio en los casos en los que un daño se produce como consecuencia de falencias o irregularidades por parte de la administración. En este sentido, se integra la responsabilidad patrimonial de la administración en los casos en los que exista una intervención de los agentes del Estado. Comprendiendo que los deberes del Estado son irrenunciables y obligatorios.</p>
<p>Por consiguiente, cualquier tipo de incumplimiento por parte del Estado en sus funciones o en la creación de perjuicios en el ejercicio de sus actividades, debe ser reparado por acción u omisión.</p>	<p>Régimen objetivo: daño especial y riesgo excepcional</p> <p>Se presenta una inconstancia en la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, por lo que en algunos casos se presenta la adopción de daño especial y en otro riesgo excepcional, con una caracterizada ausencia de argumentos plausibles. Por lo tanto, es importante que el Estado y la sociedad misma comprenda que los medios jurídicos deben ser idóneos y claros, para que se propenda por un ordenamiento sistemático, coherente, con seguridad jurídica y garantista.</p>

Nota. Elaboración propia.

De esta forma, es posible evidenciar que se encuentra dentro de los límites impuestos a estas entidades en cuanto a las peticiones que deben absolver, en un debate que lleva al argumento de la seguridad nacional, contra los derechos fundamentales de los administrados, que gozan de especial protección constitucional y legal al tratarse de víctimas del conflicto. Sobre la base de los argumentos previamente planteados, se condujo a reconocer un escenario claro de entendimiento sobre la vulneración condicional del derecho de petición en la situación descrita.

En este sentido, se considera que hay una desarmonía entre un derecho fundamental y una función administrativa que se traduce en el argumento de la seguridad nacional que en ocasiones esta errónea o maliciosamente utilizado. Por lo que se sigue que existe un conflicto hermenéutico entre dos normas que regulan la misma materia, lo cual conlleva a la vulneración del derecho de petición de información. Debido a que este se contradice e incide de forma directa con una norma constitucional que versa sobre la búsqueda la paz, pues sin verdad y claridad sobre los hechos y responsables se ha vuelto imposible, juzgar y sancionar, a los actores de una etapa de conflicto en la historia de Colombia.

Lo anterior, es un tema relevante puesto que en un contexto histórico y social como el de Colombia, se ha empleado la fuerza para garantizar los cometidos estatales. De esta forma, el sector de la sociedad más afectado es el que reside y trabaja en las zonas más apartadas del país, puesto que, las operaciones administrativas militares en un país de delicadas y complejas condiciones sociales y políticas como Colombia, se han convertido en un foco de todo tipo prácticas de ilegales o que están en contra de los derechos humanos.

Por lo que, de forma constante se presentan denuncias, investigaciones y artículos de prensa que ponen en evidencia esta situación. Es decir, es frecuente el quebrantamiento de derechos fundamentales en este tipo de operaciones, dejando múltiples víctimas y un sinnúmero de personas que acceden a la administración para conocer los móviles de cada caso, pero es allí donde la administración en cabeza del Ministerio de Defensa puede colegir ante los administrados al negar información que está inmersa bajo reserva. En contraste, el administrado al no contar con dicha información, podrá acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que sea el poder judicial quien tenga la última palabra si se puede o no acceder a información que conlleve al esclarecimiento de un suceso donde se hayan vulnerado derechos humanos.

Conclusiones

El Estado debe asumir la responsabilidad de sus actuaciones y tener una directriz clara sobre las diferentes peticiones que ejecutan las víctimas frente a entidades como el Ministerio de Defensa, en la cual a pesar de las rupturas de cargas de la administración ante los administrados puede surgir algo de injusticia para los afectados en conocer los documentos en los que se desplegaron instrucciones para llevar a cabo una operación militar.

La finalidad del recurso de reposición es permitir la modificación de las decisiones adoptadas en la actuación, en los casos en los que no se esté de acuerdo con la decisión que emana de estos procedimientos o, al ser emitida en un ejercicio de facultad propia de la administración de justicia con un relativo carácter direccional produciendo un perjuicio al solicitante o peticionario. No obstante, ante la contradicción entre la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015 se han presentado contradicciones en la procedibilidad y en la negación de acceso de la información en víctimas de operaciones militares.

El reconocimiento del derecho a la información les da la oportunidad a los ciudadanos de ejercer su derecho de información, no únicamente para las víctimas del conflicto, sino también para crear una cultura en la cual se pueda supervisar las acciones del gobierno y sus entes administrativos. En suma, la negación de este derecho a un sujeto pasivo de una operación militar vulnera su derecho a la información, defensa y debido proceso, distanciando al individuo de la verdad sobre los hechos que lo afectaron, lo cual es lo mínimo que un orden normativo puede prever.

En conclusión, el recurso de insistencia es un mecanismo eficaz para que el ciudadano acceda a información pública, no obstante, para evitar una posible negación, como bien lo menciona Ramírez (2016) se debe apuntar a una unidad de criterio sobre el procedimiento que lo dictamina. Es decir, el posible desconocimiento sobre la norma y procesos a ejecutar puede incidir de forma negativa en la decisión del juez de evaluar la petición objeto de negación por parte de la administración. Indudablemente, a lo largo de la historia en Colombia se han presentado negación y vulneración del derecho a la información, no obstante, no se puede poner en tela de juicio la efectividad del mecanismo, sino que se debe propender por analizar de forma hermenéutica: las confusiones latentes en las normativas que se han generado en diversos momentos, las incongruencias respecto a los requisitos y presupuestos para que se haga efectivo dicho recurso.

Continuando con lo anterior, en los casos en los que las víctimas buscan la verdad y el acceso a la información resulta contraproducente el ocultamiento de la información, particularmente bajo el argumento de la discrecionalidad por parte del Ministerio de Defensa en un Estado Social de Derecho y en los casos en los que las operaciones administrativas militares se han presentado violaciones a los derechos humanos por parte de estos órganos castrenses. Lo cual, es un indicador negativo en un contexto de posconflicto debido a la vulneración de derechos humanos que está

implícita en los casos de algunas víctimas. Por consiguiente, se hace latente la necesidad que el Estado redefina la práctica en Colombia sobre los objetivos militares, la responsabilidad de estos de responder en los casos en los que se han visto vulnerados derechos de las personas y preservar los derechos de los ciudadanos para no continuar vulnerándolos.

Bibliografía

- Agudelo , Ó. (2019). *Derechos humanos, democracia y poder judicial*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia .
- Álvarez , A. (1999). *Lecciones De Historia del Constitucionalismo*. Madrid : Ediciones Jurídicas y Sociales .
- Atahualpa , A. (2013). El derecho fundamental de petición. *Inversitas Estudiantes*, 101-117.
- Barreto , O. (2016). *La desnaturalización del principio de oralidad en el procedimiento laboral: una reflexión en torno a la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia* . Bogotá: Universidad Católica de Colombia .
- Becerra , J., Agudelo, A., & Bautista , M. (2017). *Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Benavides , J., & Opsina , A. (2012). La justificación de los recursos administrativos. *Revista Derecho del Estado*(29), 73-105.
- Botello , H., & Cauca , M. (2018). *Análisis de los recursos de reposición y apelación contra los actos administrativos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011*. Cúcuta: Universidad Libre .
- Bulla , J. (2010). *Derecho de petición* . Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.
- Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Filosofía, Historia y Política*, 1, 227-257.
- Caballero , S., Cruz , K., & Todaro , Z. (2016). Obligatoriedad del recurso de reposición en servicios públicos domiciliarios. *Justicia Juris*, 12(1), 65-77.
- Ceballos , J. (2002). El derecho de petición. In J. Ceballos , *El derecho de petición* (pp. 1-120). Bogotá: Leyer.

Centro Internacional para la Justicia Transicional . (2009). *Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión*. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional .

Cifuentes , E. (1992). *Sentencia T-426*.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . (2011). *Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011*. Bogotá: República de Colombia .

Congreso de la República. (1985). *Ley 56*.

Congreso de la República . (1985). *Ley 57*.

Congreso de la República . (2011). *Ley 1437*.

Congreso de la República . (2013). *Ley Estatutaria 1621*.

Congreso de la República. (2014). *Ley 1712*.

Congreso de la República . (2015). *Ley 1755*.

Corte Constitucional . (1992). *Sentencia T-426*

Corte Constitucional. (2004). *Sentencia T-301*.

Corte Constitucional . (2004). *Sentencia 881*.

Corte Constitucional . (2007). *Sentencia C-491* .

Corte Constitucional . (2010). *Sentencia T-466*.

Corte Constitucional. (2011). *Sentencia C-371*.

Corte Constitucional . (2011). *Sentencia C-818*.

Corte Constitucional . (2014). *Sentencia C-616*.

Corte Constitucional . (2014). *Sentencia c-951*.

Corte Constitucional, La Sala Plena . (2013). *Sentencia C-274*.

Constitución Política de Colombia . (1991). *Constitución Política de Colombia* . Bogotá.

- del Río , C. (2012). Estudio sobre el derecho al recurso en el proceso penal. *Estudios Constitucionales*, 10(1), 245-288.
- Defensoría del Pueblo . (2021). *El derecho de petición y las acciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales y del ambiente*. Bogotá: Defensoría del Pueblo .
- Fernández , M. (2016). *Práctica Procesal Civil* . Bogotá: Tirant lo Blanch .
- Fundación Libertad de Prensa . (2010). *Manual para el acceso a la información* . Bogotá: FLIP .
- La Fundación para la Libertad de Prensa . (2011). *El acceso a la información pública en Colombia. Entre el secreto y la filtración* . Bogotá : La Fundación para la Libertad de Prensa .
- Franco , W. (2011). *El derecho de petición frente al nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011)*. Bogotá : Universidad Nacional .
- Locke , J. (1983). *Ensayo Sobre el Gobierno Civil*. Barcelona : Ediciones Orbis .
- Gamboa , Y. (2014). *Naturaleza Jurídica de la respuesta de derecho de petición* . Bogotá : Universidad Militar de Nueva Granada .
- Gómez , E., González , J., & Torres , B. (2018). *Garantías constitucionales del derecho de defensa en las audiencias preliminares* . Cúcuta : Universidad Libre .
- Herrera , H. (1994). *Sentencia T-158*.
- Lancheros, J. A. (2012). El delito de omisión de las fuerzas militares. In J. A. Vargas, *El delito de omisión de las fuerzas militares* (p. 13). Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado de:
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2185/Vargasjose2012.pdf?sequence=1>
- Madrid , M. (1998). *Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de Juristas*. Bogotá : Comisión Colombiana de Juristas .

- Molano , A. (2014). *Entre transición y restauración. Desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto: contribuciones al debate sobre justicia transicional en Colombia*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer.
- Morón, F. (1998). *Sentencia T-601*.
- Secretaría de Transparencia . (2015). *ABC. Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública* . Bogotá: República de Colombia .
- Patiño , J., & Ruíz, C. (2012). El principio constitucional de participación frente a la unilateralidad del acto administrativo. *Derecho y Realidad*(20), 432-449.
- Pérez , V. (2014). *El derecho de petición frente a la reserva legal en Colombia* . Medellín: Universidad Cooperativa de Colombia .
- Pretelt , J. (2012). *Sentencia T-1082*.
- Ramírez , J. (2016). *El recurso de insistencia en Colombia como mecanismo para acceder a información pública* . Bogotá: Universidad Santo Tomás.
- Rodríguez , A. (2019). *La eficacia del recurso de insistencia en Colombia*. Bogotá : Universidad Santo Tomás .
- Rojas, J. G. (2009). El garantismo en el marco del derecho administrativo sancionado. *El garantismo en el marco del derecho administrativo sancionado*. Bogotá: Ago-Usb.
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/4077/407748995004.pdf>
- Rojas , G. (2016). *De la justicia a los derechos fundamentales. Un lectura desde el realismo jurídico clásico*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia .
- Romero, J. E. (2010). Derecho de peticion. Bogotá: Nueva Jurídica. Recuperado de:
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12538/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1>

Romero , C. (2017). *Responsabilidad del Estado colombiano por Actos Terroristas*. Bogotá:

Universidad Católica de Colombia .

Ruiz , L. (2007). El derecho a la prueba como un derecho fundamental. *Comité para el Desarrollo de la Investigación*, 184-206.

Vásquez , D., & Gil , L. (2017). Modelo constitucional de la Fuerza Pública en Colombia. *Revista Prolegómenos*, 1, 139-2017.

Vergara , I. (2018). *El acceso a la información pública como derecho humano*. Medellín.

Vivas , T., Chávez , E., Cubides , J., Dizdaveric , A., Gaitán , I., Guío, R., . . . Wabgou , M.

(2016). *Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia* . Bogotá: Universidad Católica de Colombia .

Zapata , M., & Valencia , J. (2012). Debido proceso probatorio y derecho de contradicción probatoria en el trámite de revisión de fallos de tutela. *Opinión Jurídica* , 175-189.